



Proceso

informativo semanal

Año 25, No 1105

julio 7, 2004
ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte" Ignacio Ellacuría

Editorial

2

Corrupción en el poder ejecutivo

Político

4

Sadam ante la justicia

Económico

6

El déficit habitacional

Económico

8

*El pulso económico de EEUU y su
impacto en El Salvador*

Internacional

10

Los nacionalismos y sus matices

Reporte IDHUCA

12

Juntos el hambre y las ganas de comer

Documento

14

Desarrollo productivo en economías abiertas

Corrupción en el poder ejecutivo

Pareciera que a la prensa le han dado vía libre para exhibir la corrupción en algunas instituciones públicas, dependientes del poder ejecutivo. A juzgar por la ofensiva contra el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la empresa encargada de controlar la emisión de gases de los vehículos, la veda sobre la gestión de Flores habría sido levantada, al menos de forma selectiva. Con todo, los altos funcionarios del gobierno actual se muestran circunspectos cuando les piden comparar gobiernos. Las denuncias confirman las sospechas de corrupción en el poder ejecutivo, pero aquélla es más amplia de lo que la prensa está mostrando. En el gobierno de Flores, la prensa se ensañó con los poderes legislativos y judicial, pero dejó de lado al ejecutivo como si éste fuera la excepción. Es interesante observar cómo los funcionarios públicos favorecen a socios y amigos y cómo ellos mismos se benefician a través de éstos. Alteran los términos de referencia de las licitaciones, modifican las ofertas presentadas y disponen del dinero público con una enorme liberalidad, pues pagan bastante más de lo que cuestan los bienes y servicios que adquieren. Un familiar o amigo al frente de una institución pública es una oportunidad única para hacer buenas ganancias, a costa de la hacienda pública.

Tampoco hay que pasar por alto la inmoralidad de la empresa privada, la cual no puede competir limpiamente en una licitación, sino que debe apoyarse en amistades, compadrazgos y sobornos para hacer negocio. Es la misma empresa privada que suele proclamar su fe ciega en el mercado libre, la libre competencia y la no intervención estatal. En la vida real, no practica el mercado libre, porque no resiste la competencia, y necesita del favor estatal, porque de lo contrario no podría permanecer en el mercado. Por eso se las arregla para colocar a sus representantes en puestos claves del gobierno. De esta manera se vuelve a comprobar que la empresa privada es una de las fuerzas que más atenta contra la gobernabilidad, puesto que incita y acepta violar las leyes más elementales para hacer ganancias. Eso, para no hablar de los bancos y sus tarjetas de crédito, de las distribuidoras de los servicios públicos, de las empresas del transporte público y de las farmacéuticas, que se aprovechan de la desprotección y la ignorancia de los consumidores, todo en nombre de la libre empresa. El gobierno actual ha mostrado la intención de someter estas empresas a la legislación vigente. El desafío es enorme, pues se enfrentará con el gran capital, el mismo que lo colocó donde está, precisamente para que no hubiera cambios. Sin embargo, no puede combatirse la pobreza, ni promoverse el desarrollo humano con un capitalismo tan salvaje como el salvadoreño. Es un capital que se coloca por encima de la legislación y que considera al poder ejecutivo como un servidor complaciente de sus deseos. La denuncias de la corrupción gubernamental también pone en evidencia la realidad de una empresa privada inconsecuente con su propio credo.

Los tres casos en los que la prensa se ha concentrado están relacionados con recursos vitales para el país: el agua, el medio ambiente y el deporte. Con tanta corrupción, no es extraño que el agua sea cada vez más escasa y de peor calidad, que el medio ambiente sea hostil a la población, lo cual se manifiesta en una serie de enfermedades evitables, y que el deporte salvadoreño no levante cabeza, ni dentro ni fuera del país, no obstante las falsas expectativas que crean los comentaristas deportivos. Y eso que aún no se ha investigado a las federaciones de las diversas disciplinas deportivas, donde también hay corrupción disfrazada de honorabilidad y donde también se encuentran diputados y otros funcionarios públicos. Los hijos e hijas de los directivos son seleccionados para representar al país, aun cuando su rendimiento deportivo no sea el mejor. Con criterios igualmente subjetivos se aceptan invitaciones y se seleccionan los representantes oficiales. Las investigaciones debieran extenderse a otras ramas del ejecutivo como obras públicas, donde se han manejado millones de dólares para construir infraestructura, por medio de empresas privadas. Asimismo, también amerita echar una mirada a la administración del transporte público, donde hay sobrados indicios de corrupción.

En los tres casos ventilados en la prensa es evidente la ausencia de controles eficaces sobre la administración pública. Las instituciones responsables de esta función, en particular la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República han demostrado una ineficiencia inexcusable, no obstante consumir una buena partida del presupuesto nacional. Los funcionarios encargados de ejercer esos controles son tan ineptos que, a juzgar por lo que declaran, se informan por la prensa nacional de lo que sucede en las instituciones públicas que, por ley, debieran controlar.

Ante esta ineptitud, la prensa tiene un papel insustituible para controlar a funcionarios y empresarios. Es cierto que sus denuncias no son suficientes para fundamentar un proceso judicial, pero al menos exponen a los corruptos y su corrupción ante la opinión pública, lo cual temen más, porque, por lo general, se trata de conocidos personajes con fama de honorables. Pero para cumplir con esta función, la prensa debe ser libre y en El Salvador no lo es. Su actitud ante el poder ejecutivo durante el gobierno de Flores lo demuestra. No se atrevió a exponer su corrupción, hasta que éste dejó el poder. Si la prensa y la ciudadanía hubieran gozado de esa libertad en el gobierno anterior, la corrupción en la gestión del agua y del deporte se hubiera conocido a tiempo y hubiera podido detenerse. Ahora es tarde para recuperar el dinero y seguramente también para pedir responsabilidades judiciales, porque la coartada estará bien montada. Aun así, la prensa y la opinión pública pueden ejercer un control sobre la corrupción mucho más eficaz que las instituciones estatales. La tarea no es fácil y, además, es arriesgada, porque se trata de investigar los entresijos del poder económico y político. Es aquí donde verdaderamente se ejerce y se pone a prueba la libertad de la prensa y no en la difusión de banalidades y trivialidades de la vida nacional y sus personajes. La libertad se ejerce frente al poder de los fuertes y en la exposición de las vergüenzas de los débiles.

Sadam ante la justicia

El pasado jueves 1º de julio, Sadam Hussein compareció ante la justicia en Irak. Todos los medios de prensa internacional presentaron la noticia. El ex dictador llegaba esposado ante un juez que le leyó los diversos cargos que pesan en su contra. Esta fecha quedará grabada, sin duda, en la memoria de todos los iraquíes. Por un lado, tenemos las reacciones de los simpatizantes de Sadam, los sunnitas, quienes, según dicen los periodistas, vivieron alegremente durante el reinado del ex dictador. Éstos manifestaron su indignación con lo que estaba ocurriendo con su ex presidente. Algunos de ellos juraron ante las cámaras de televisión internacionales que estarían dispuestos a dar su sangre por Hussein.

Por otro lado, sus detractores, los chiítas y kurdos, quienes fueron las principales víctimas de la tiranía sanguinaria instaurada en Bagdad, pedían la cabeza del ex presidente. Para éstos, la única manera de hacerle pagar sus múltiples crímenes pasa por quitarle también la vida. Con ello, se espera alejar por siempre el espectro de las torturas y de las humillaciones que consistía la marca especial del régimen. En fin, el juicio de Sadam despierta pasiones fuertes y remarca la polarización de la sociedad iraquí.

Sin embargo, ante todo el embrollo, Sadam apareció desafiante e imperturbable, dispuesto a intimidar al joven juez que leía los cargos en su contra. Sadam le recalcó el hecho de haberse prestado a juzgarlo por orden del invasor. Se negó a firmar el acta que presentó el juez que instruye el proceso. Además, respecto de los cargos por haber invadido a Kuwait, Hussein reprendió al juez por estar dispuesto a defender a quienes habían vilipendiado el honor de su país. El ex presidente también puso en duda la legalidad del tribunal. Al parecer, será la línea en que sus abogados basarán su defensa. Uno de ellos

declaró que la “causa está en contradicción con las leyes internacionales y las convenciones de Viena y de Ginebra que consideran inválido todo acuerdo entre un ocupante y un Gobierno provisional, porque se deriva de una orden”.

Un verdadero juicio a Sadam sería, sin duda, un acontecimiento de primera importancia para la mayoría de los iraquíes. Quien fuera presidente del estado árabe por más de tres décadas, es acusado de los peores crímenes contra su pueblo. Se habla de miles de asesinatos y desapariciones durante un reinado marcado por el terror. Cualquier sospecha o acusaciones (fundadas o no) de complotar contra el régimen se pagaba con la muerte, la tortura o la simple desaparición del acusado y, en algunos casos, hasta su familia pagaba los platos rotos. De esta manera, Sadam y sus hombres fuertes —entre ellos, sus dos hijos muertos en combate en contra de la ocupación estadounidense— controlaban con una mano férrea el destino de los iraquíes.

Por todo lo anterior, hay algo de verdad en la propaganda política de Bush y de sus aliados que se ufanan de haber liberado al pueblo de Irak de un dictador sanguinario. En ausencia de las armas de destrucción masiva y de los lazos de Sadam con Bin Laden, motivos exhibidos para justificar la guerra, las atrocidades del antiguo régimen se usan como argumentos. A decir verdad, la mayoría de los iraquíes no desaprueban el resultado de la invasión que terminó con el reinado de Sadam Hussein. Al contrario, critican el caos después de la guerra, la arrogancia del libertador, las nuevas humillaciones sufridas y la incapacidad de los Estados Unidos para restaurar la seguridad en el país.

Sadam Hussein no sólo era un verdugo para su pueblo, sino que también sus vecinos fueron víctimas de su delirio de grandeza y voluntad tiránica. Primero, la repú-

blica de Irán, en la década de los 80 y luego el emirato de Kuwait en el decenio siguiente, tuvieron que enfrentarse con el tirano de Bagdad. En el primer caso, pese al apoyo estadounidense a las tropas de Sadam, las armas químicas que éste usó en contra de los iraníes, no pudo hacerse con la victoria. En el segundo caso, fue una coalición de países occidentales, Francia, Gran Bretaña, entre otros, encabezados por los Estados Unidos, desalojaron a Sadam de Kuwait. Esta decisión fue la gota que derramó el vaso. Luego de más de una década de embargo total que arruinó la economía del país, Sadam pagaría su temeraria invasión a Kuwait, con la guerra de Bush hijo que significó a la postre su desalojo del poder.

Por todo lo que ha sucedido durante su largo mandato, no puede más que reforzarse el principio según el cual Sadam debería rendir cuentas al pueblo iraquí. Los presuntos criminales, sin importar el pelaje que tienen, tienen que presentarse ante los tribunales por una doble razón muy importante para la salud de los países. Por un lado, la justicia, hace pagar a los criminales sus fechorías. De esta manera, se pone un punto final a la impunidad, incompatible con la marcha de cualquier sociedad en la senda de la democracia. Por otro lado, es un mecanismo que permite a la sociedad devolver su dignidad a las víctimas, cuyas vidas fueron borradas por sus asesinos.

Además, un juicio serio a Sadam también serviría como un buen ejemplo en los países musulmanes del Oriente Medio, gobernados en general, por tiranos atávicos, dispuestos a pasar por encima de los derechos más elementales de su pueblo con tal de asegurar su control del poder. Por todas las razones anteriores, difícilmente se puede objetar la idea de un juicio a Sadam. No se trata de vengarse del ex dictador. El objetivo consiste en arrojar luz sobre una práctica sistemática de torturas y asesinatos que comprometió a toda la sociedad iraquí.

Un juicio de esta índole debería no sólo

condenar, sino también explicar por qué un grupo de personas pudo mantener por tan largo tiempo subyugado a todo un pueblo. Debería encontrar las fallas culturales que explican esta realidad, para determinar la responsabilidad de toda la sociedad en ello. Y, finalmente, preparar a las nuevas generaciones para que nunca más se repitan estas atrocidades.

La gran pregunta que conviene hacerse es si el actual juicio que las fuerzas iraquíes se disponen a someter a Sadam reúne las características para cumplir con las consideraciones anteriores. En primer lugar, las autoridades que se aprestan a juzgar a Hussein no pueden soslayar el hecho de recibir órdenes directas de las autoridades estadounidenses, las cuales se encuentran en Irak de manera ilegal, luego de haber pisoteado la legalidad internacional. En este sentido, tienen mucho de cierto las declaraciones del antiguo dictador que decía ser rehén de Bush, quien usa a las autoridades iraquíes para asegurarse la victoria en las próximas elecciones presidenciales en su país.

El nuevo Irak que se dice querer construir debería garantizar la independencia de los jueces, la ecuanimidad del sistema y la imparcialidad del aparato judicial, precisamente porque Sadam le negó a sus víctimas iraquíes estos derechos durante más de treinta años. En este sentido, la farsa que se está organizando en Bagdad, si bien que podrá declarar sin mayor sorpresa la condena a muerte del ex dictador iraquí, difícilmente podrá ayudar a la reparación a las víctimas en una sociedad acostumbrada a la tiranía de sus dirigentes.

Bush se jacta de llevar ante la justicia al tirano para reconquistar la confianza de sus ciudadanos. En las condiciones actuales, el proceso servirá nada más para resolver algunos de problemas políticos de los invasores y para saciar el deseo de venganza de los actuales dirigentes de Bagdad, pero no contribuirá a que la sociedad iraquí emprenda un nuevo camino de democracia y de justicia.

El déficit habitacional

Poseer una vivienda propia es vital para una familia. Al interior de ese espacio físico donde convive y proporciona alguna privacidad, se transmite una serie de valores y referentes sociales que determinan la manera en la que sus miembros han de insertarse en la vida social. Desde una óptica económica, la vivienda se constituye en una necesidad fundamental para que las familias puedan satisfacer sus necesidades materiales más importantes. La carencia de la misma se constituye en un obstáculo serio en la búsqueda del desarrollo de las familias y, por consiguiente, de la sociedad.

En el país existen diferentes tipos de vivienda, cuya calidad refleja en buena parte la condición socioeconómica a la que se pertenece. Por tanto, puede ser un referente interesante para monitorear la calidad de vida de las personas que en ella habitan. En esta dirección, existe una gran cantidad de personas que, debido a su baja capacidad para generar ingresos, se les dificulta acceder a un tipo de vivienda de calidad. Al Estado le corresponde, entonces, atender la demanda de vivienda de esos grupos más necesitados, posibilitando la construcción de viviendas que tengan las características físicas mínimas para el desarrollo de las personas.

Para cubrir la demanda de vivienda por parte de las personas de escasos recursos, existe una entidad del Estado salvadoreño destinada a este fin: el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Mediante esta entidad se proporcionan créditos a las personas de escasos recursos para adquirir y/o remodelar sus casas de acuerdo a su capacidad adquisitiva. En la actualidad existe un incremento de la demanda de vivienda con las condiciones más básicas para vivir y la oferta de este tipo de vivienda es muy baja. En otras palabras, no existe una política habitacional coordinada por parte del Estado capaz de dar solución a la demanda de viviendas por personas de esca-

sos recursos

De acuerdo a los datos del Viceministerio de Vivienda, existe una demanda anual de entre 25 y 30 mil viviendas para personas de escasos recursos. Sin embargo, esta demanda es mucho mayor que la oferta anual de este tipo de vivienda, ya que, para el presente año, los proyectos destinados a la construcción de viviendas mínimas no sobrepasarán las 18 mil unidades habitacionales. Es decir, existe un rango entre 7 y 12 mil familias de escasos recursos que no podrán adquirir una vivienda acorde a sus condiciones económicas.

Además de este déficit habitacional cuantitativo existe el déficit habitacional cualitativo. Ello significa que existe una gran cantidad de familias que tienen acceso a una vivienda, la cual carece, sin embargo, de algunos de los servicios básicos: agua, luz, servicio telefónico. Para dimensionar más esta problemática en el plano nacional, según el *Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2003*, existe en el país la necesidad de construir 31,169 viviendas para eliminar el déficit habitacional cuantitativo y 468,796 para erradicar el cualitativo. Es decir, el déficit habitacional está estructurado en 6.23% (déficit cuantitativo) y 93.77% (déficit cualitativo). Esto implica que el Estado debe esforzarse para canalizar más recursos destinados al arreglo y la ampliación de las viviendas existentes, a fin de que cumplan las necesidades de espacio y servicios.

Desde otra perspectiva se puede decir que la mayoría de las 499,965 viviendas correspondientes al déficit habitacional de El Salvador se concentra en las zonas rurales del país. En el ámbito urbano, el déficit asciende a 138,548 viviendas que representan el 27.71% del déficit. En el plano rural el mismo está constituido por la falta de 361,417 viviendas, equivalente a 72.29% del déficit. Aunque desde hace diez años se han realizado esfuerzos para lo-

grar la reducción del déficit, éste se presenta aún considerablemente alto. Para 1992, el déficit habitacional era de 595,102 viviendas, mientras que, para 2001, había bajado a 508,807. Es decir, hubo una reducción de cerca de 100 mil viviendas. Sin embargo, esto no es suficiente para paliar las necesidades de vivienda en El Salvador y particularmente para las familias de escasos recursos.

Basándose en los datos del informe citado anteriormente, la reducción del déficit habitacional se calcularía en un monto de 470.1 millones de dólares. Este monto estaría descompuesto de la siguiente manera: 95.07 millones se destinaría para la construcción de nuevas viviendas y 375.04 millones de dólares para la reparación, ampliación y reacondicionamientos de viviendas para una vida digna de las familias. A partir de estos datos se puede calcular el monto que se necesitaría para erradicar la sobredemanda de vivienda mínima para un año. El estimado arroja un monto de entre 21.35 y 36.6 millones de dólares. Esto sería equivalente a menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) promedio registrado en los últimos años, pero la construcción de dichas viviendas no podría ser viable en el corto plazo debido a la mala situación de las finanzas públicas.

Enfocándose en los aspectos que caracterizan a la cantidad de viviendas con déficit cualitativo destaca la carencia de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. Sobre el primer aspecto, cerca de un 24% de los hogares no tienen acceso a agua por cañería. Estos se logran abastecer mediante pipas, pozos, ojos de agua o ríos. Para las personas que se abastecen con este tipo de agua, tres cuartas partes consideran que es adecuada para beber. Sin embargo, los estudios indican que cerca de una quinta parte de las personas que se encuentran en esa situación ignoran que están bebiendo agua de fuentes insalubres.

Por otro lado, un 15% de los hogares no tiene acceso a energía eléctrica. Aun-

que esta cifra es pequeña, no considera las grandes disparidades que existen entre las zonas rurales y urbanas del país. En las zonas urbanas, este servicio prácticamente es universal, ya que llega a más del 80% de las familias, incluyendo familias en extrema pobreza. En el caso de acceso a servicio telefónico, únicamente un 45% de los hogares tienen acceso a este servicio. En este caso, al igual que en el acceso de la energía eléctrica, existen fuertes disparidades entre las zonas rurales y urbanas del país: en la zona urbana un 58% tiene acceso al servicio, mientras que en la rural un poco más de la quinta parte tiene acceso al mismo (22%).

Como se puede notar, se deben realizar grandes esfuerzos en la política habitacional para mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas, sobre todo, de las que habitan en las zonas rurales. El Estado debe asumir la responsabilidad de proporcionar y gestionar la existencia de un tipo de vivienda digna que esté acorde con la capacidad adquisitiva de las familias. ¿Qué sentido tiene que a través de la política habitacional se construyan un tipo de vivienda que es de difícil acceso para las familias de muy bajos ingresos? En este sentido, el Estado debe reconocer que la producción privada de viviendas de esta naturaleza únicamente es viable si se subsidia constantemente la producción y el consumo de viviendas mínimas para personas de escasos recursos.

También se debe realizar un gran esfuerzo para erradicar la carencia de los servicios básicos de muchos hogares salvadoreños. Principalmente, se deberían enfocar los esfuerzos en la ampliación del acceso a agua potable, ya que éste es un aspecto determinante de la salud de las familias. Le siguen en orden de importancia la energía eléctrica y la telefonía. Es necesario, pues, el establecimiento de prioridades, ya que a partir de las mismas pueden trazarse las metas a alcanzar y obtener resultados en el mediano y largo plazo.

El pulso económico de EEUU y su impacto en El Salvador

A principios de este año, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron que el "excesivo déficit fiscal en Estados Unidos podría afectar el sostenimiento a largo plazo de la economía global" (BBC news, 08.01.04). El FMI señaló, en ese entonces, que "la recesión, el recorte de impuestos y los astronómicos desembolsos para financiar la llamada guerra contra el terrorismo" eran las culpables de esta tendencia deficitaria de EEUU.

En la coyuntura económica actual, la situación económica de dicha nación no parece haber variado y las medidas para afrontar el déficit fiscal de la economía estadounidense no se han hecho esperar. El director de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ha comenzado a elevar las tasas de interés desde este 30 de junio. La oposición política, a su vez, ha arreciado sus críticas hacia las políticas económicas de la administración del presidente Bush concentrando sus esfuerzos en demostrar que sus políticas de liberalización, impuestos regresivos, gastos excesivos en el área militar, entre otros, han llevado a una posición de "no retorno fiscal" y de extremo riesgo, ya no sólo para la economía estadounidense, sino para la estabilidad económica global.

Actualmente, según los análisis vertidos por *The Economist* (02.07.04) en la agenda global hay que tomar en cuenta que la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de elevar las tasas de interés por primera vez en los últimos cuatro años y la tendencia que podría experimentarse en el transcurso del próximo semestre de este año es hacia una escalada en el costo de los préstamos.

Esta reacción "alcista" de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal elevaría, a su vez, el nivel de las tasas de interés en El Salvador, lo cual podría ser contraproducente para la economía del país por la siguientes razones: En primer lugar, el contexto de la economía estadounidense ha sido muy diferente a la de El Salvador en estos últimos dos semestres (segunda

mitad de 2003-primer mitad de 2004). Mientras EEUU ha estado experimentando una dinámica de crecimiento positiva y acelerada (ha tenido tasas superiores al 8% en los últimos meses y ha podido traducir este crecimiento en un alza en la creación de empleos), en El Salvador se ha dado una dinámica inversa, pues los índices de crecimiento económico y por tanto, de empleo, se han mantenido deprimidos especialmente en este primer semestre de 2004 (PIB 2.0-2.3%) (ECA, 663-664). Así las cosas, es obvio que las realidades económicas de EEUU y El Salvador actual difieren y por lo tanto, las políticas económicas que se deberían utilizar deberían ser diametralmente diferentes y adaptadas a su contexto, ya que lo que podría ser una medicina para la economía norteamericana, podría ser letal para El Salvador.

Piénsese que si El Salvador depende de lo que dicte la Reserva Federal de EEUU, y si ahora ese país estima que le conviene una política monetaria restrictiva (expresada en el aumento las tasas de interés) para darle mayor equilibrio a su economía pujante, una medida de este tipo solamente lograría deprimir aún más la economía salvadoreña, pues los préstamos para la inversión serían más caros y desestimularían las acciones y proyectos a futuro de los inversionistas en el país, lo cual podría traducirse a la larga, en una mayor caída del producto interno bruto salvadoreño y anclaría al conjunto de los sectores económicos en una recesión.

¿Pero por qué Estados Unidos ha llegado a este punto de querer subir las tasas de interés, después de tanto tiempo con la filosofía del "dinero barato" (bajas tasas de interés) en el timonel de la Reserva Federal? Al respecto, parte de la explicación podría encontrarse en las mismas raíces de la caída del valor del dólar estadounidense experimentada desde 2003 hasta la fecha.

Si uno examina los reportes económicos globales, comprobará cómo el valor del dólar ha ido declinando hasta tal punto que, ya para principios de 2004, la libra esterlina

análisis económico

en relación con el dólar se encontraba en su punto más alto de valor en los últimos 11 años. Lo mismo le pasó al dólar al medirse con el franco suizo, la krona sueca y el kronor noruego, que se encontraron este año en curso en su posición más fuerte con respecto al dólar desde 1996 el primero y 1997 los dos últimos. Asimismo, el euro también ganó valor en un 16.5% con respecto al dólar.

Ahora bien, curiosamente la economía estadounidense ha tenido esa dualidad: por un lado unas tasas de crecimiento aceleradas y por otro, una moneda cuyo valor sufre un pronunciado descenso, con respecto a las otras divisas mundiales. Lo que ha ocurrido es que debido a que la tasa de crecimiento local de EEUU supera el promedio mundial, los consumidores han podido atraer más importaciones, pues han tenido mayor entrada de ingresos. Sin embargo, también ha sido cierto que el país ha necesitado pedir prestado para financiar el comercio y el déficit de cuenta corriente (exportaciones siempre menores a las importaciones).

Así los productos y servicios a nivel global han continuado entrando en Estados Unidos mientras el dinero sale, produciendo una constante presión sobre el dólar. El efecto hizo que, en definitiva, las tasas de interés en EEUU se encontrasen en todo este período reciente en su nivel más bajo en 45 años, lo cual desincentiva el flujo de capital que determina las tasas de cambio.

Aún estando las cosas así para la moneda estadounidense, el antiguo compromiso de Washington hacia un dólar fuerte parece haberse desvanecido, probablemente porque los políticos se han dado cuenta de que el país sale ganando con una moneda más débil, después de todo, cuando cae el valor del dólar, Estados Unidos es el que menos sufre. Esto es así en tanto que, aunque para sus consumidores ahora es más difícil importar, pues les sale más caro, lo cierto es que las empresas estadounidenses se vuelven mucho más competitivas en relación con Europa y Japón con monedas más caras. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, con un dólar débil, los precios de las materias primas que clásicamente se han expresado en dólares, han subido su precio. El oro y el petróleo se han disparado con la caída del dólar, pues ahora se vuelve relativamente más caro adquirirlos con la

misma moneda.

Para El Salvador, una mayor presión en sus propias tasas de interés es consecuencia directa de la enorme dependencia que el país tiene hacia la política monetaria estadounidense desde que implementó la dolarización en su economía. Además, hay una realidad tácita: el discurso del FMI tampoco ha variado. Para el organismo multinacional, el déficit fiscal de EEUU alcanzado por la administración Bush ahora podría producir mayor presión sobre las tasas de interés y poner en riesgo a la economía de EEUU, así como del resto de mundo. ¿Pero qué pasa si la espiral en ascenso que se avecina de las tasas de interés llega a sostenerse como se dio en 1999, donde se dieron seis alzas en un período de once meses, tiempo extremadamente corto? El subdirector del FMI, Charles Collyns, asegura que los inversores internacionales podrían perder confianza en el dólar y esto "podría forzarlos a considerar invertir en otro lado."

El informe de dicho organismo crediticio internacional señala que el dólar se ha visto afectado por el rápido crecimiento del déficit presupuestario. Esto refleja pues, que el ejercicio del creciente gasto en la guerra en Irak no sólo ha sido contraproducente en términos de vidas humanas, espirales de violencia y conflictos sociales, sino que además esta carga ha tenido costos económicos traducidos en desequilibrios que podrían afectar a la economía mundial, especialmente la de aquellas economías dependientes del dólar como El Salvador.

El problema de las finanzas desequilibradas de guerra de Estados Unidos ha sido tan irresponsable y marcado que en la reciente cumbre del G8 en el estado de Georgia, Estados Unidos; Jacques Chirac, presidente de Francia se quejó públicamente de estos desequilibrios en el gasto presupuestario estadounidense. Los europeos han señalado con horror el hecho de que la administración del Presidente Bush llegue a experimentar un déficit presupuestario equivalente al 4.7% del producto interno bruto de este año. La "economía de la guerra" estadounidense podría afectar en grado sumo al país y esto es un riesgo que la administración del ex presidente Flores no previó al dolarizar la economía.

Los nacionalismos y sus matices

Los efectos del fenómeno de la globalización no sólo han tenido consecuencias en el ámbito económico, sino que también han incidido en lo político y en lo sociocultural. Precisamente uno de los aspectos más criticados por los movimientos antiglobalización ha sido el “fantasma” de la homogeneización cultural, como consecuencia de la expansión del capitalismo neoliberal a escala mundial, y que supondría la conversión paulatina de las diversas culturas expandidas a lo largo y ancho del globo a imagen y semejanza de Occidente, o mejor dicho, de EEUU. En definitiva, se trata de la desaparición de lenguas, culturas, tradiciones, estilos de vida, moda etc. para dar lugar a una “norteamericanización” de nuestras culturas y sociedades.

Esto habría que discutirlo; sin embargo, no podemos negar que, curiosamente, el proceso ha sido doble: por un lado la llamada sociedad en red va tomando cada vez mayor consistencia, y por otro, los nacionalismos se han convertido en uno de los principales conflictos políticos, herencia del siglo que acaba de finalizar.

Esta confrontación entre lo global y lo local surge en un contexto nuevo, pero lo que no es ninguna novedad es la existencia del nacionalismo como aspiración política. Recordemos las conquistas del “nuevo mundo”, el éxito del Estado-Nación en Europa y EEUU en el siglo XIX, los procesos de descolonización, el nacionalsocialismo alemán, los nacionalismos contemporáneos —tanto integradores como separatistas— los fundamentalismos políticos y religiosos, los de izquierdas y los de derechas etc., que son ejemplos de cómo los esfuerzos por organizar un territorio basándose en unas características e instituciones comunes, y que identifiquen como semejantes a los que viven bajo dicho territorio ha sido durante siglos, y continúa siendo en la actualidad, una pugna que enfren-

ta a sociedades y gobiernos.

En Europa, en la actualidad, los nacionalismos más conflictivos se dieron a conocer por su componente violento; tales son los casos de Irlanda del Norte, el País Vasco o Córcega. Lo cual no significa que, primero, estas sean las únicas reivindicaciones nacionales existentes en Europa y, segundo, que los nacionalismos sean violentos por naturaleza. Negar legitimidad al proyecto democrático nacionalista, satanizarlo como se ha hecho con el comunismo, como si de una gran cruzada contra los infieles se tratara, es negar la posibilidad de una pluralidad democrática.

Posiblemente el ejemplo más exitoso de la idea de Estado-Nación en Europa lo constituya Francia. No es que la unificación nacional de Alemania o Italia en el siglo XIX tenga problemas para sostenerse, sino que Francia es, en organización territorial, el país centralizado por excelencia, mientras que en su vecina España, las exigencias de carácter nacionalista han hecho de su modelo autonómico uno de los países más descentralizados del mundo.

Precisamente en España, los llamados “nacionalismos periféricos” se han convertido en el principal quebradero de cabeza de un gobierno caracterizado por “clivajes” nacionalistas/no nacionalistas. A finales de la década de los 70, con el final de la dictadura franquista y para resolver una transición hacia la democracia, se tuvo que negociar un modelo de organización descentralizado que satisficiera las demandas de aquellas regiones preocupadas por su autonomía con respecto al aparato estatal, y que con el régimen autoritario habían quedado reprimidas. El resultado no fue del agrado de todas las partes implicadas, pero no impidió el progresivo fortalecimiento de un régimen democrático estable. Sin embargo, el conflicto ha estado durante estas décadas protagonizado, desgraciadamente,

análisis internacional

por grupos terroristas como ETA en el País Vasco, el Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) en Cataluña y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por parte del Estado.

Sobre nacionalismos se ha escrito mucho y se ha discutido hasta la saciedad. No obstante, es conveniente advertir de ciertos estereotipos que circulan con demasiada frecuencia y que impiden hacer una aproximación adecuada a estos fenómenos. Para empezar, la asociación directa, naturalizada, de nacionalismo con violencia es injusta. Es evidente que por nacionalismos se han generado escalofriantes episodios de violencia, desde los asesinatos de ETA, pasando por el genocidio de Ruanda, la guerra en Palestina o en Chechenia. Pero no simplifiquemos: en el caso vasco, todos los partidos políticos de carácter nacionalista, con la excepción de uno, son partidos democráticos, condenan abiertamente la violencia y son elegidos, guste o no, por su ciudadanía en elecciones democráticas.

Por otra parte, la guerra de los "buenos" contra los "malos" popularizada por el fundamentalismo norteamericano y, en el caso español, por los sectores derechistas, es ridícula. En primer lugar porque víctimas y verdugos podemos encontrarlos en ambos bandos y, en segundo lugar, esto significa olvidar, o mejor dicho, meter en un mismo saco a todas las alternativas intermedias que ofrecen otro tipo de opciones, ni blancas ni negras, sino llenas de matices, y que definitivamente enriquecen el pluralismo democrático.

Alfonso Pérez-Agote, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado importantísimas aportaciones a la hora de analizar los nacionalismos. Lejos de tratar de definir las características que convierten a una nación como tal, lo que propone es la idea de que es el propio conjunto de personas que componen la nación la que lo convierten el proyecto en real. Es decir, la nación es un conjunto de personas que saben que la conforman, y desde

el momento que la definición que de sí mismos tienen es exitosa, eficaz e influye su idea en los demás de forma significativa, podemos hablar de su real existencia.

Se habla de un ataque contra España, como si de una emboscada se tratara, cuando tan nacionalista es la postura separatista de vascos y catalanes como la de aquellos empeñados en construir una España grande y unida. Ser nacionalista español no es ni mejor ni peor que ser nacionalista catalán o vasco: son los medios para conseguir los objetivos lo que les otorga legitimidad.

Por lo tanto, es necesario principalmente advertir de la diversidad de elementos que podemos apreciar a la hora de analizar los diferentes nacionalismos. Si bien podemos encontrar denominadores comunes, cada trayectoria histórica o ideología política define un contexto concreto. Por ejemplo, si bien en España se identifica al nacionalismo con la izquierda radical y separatista, en el caso de El Salvador es la derecha de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) la asociada con la ideología nacionalista.

El discurso articulado por los fundadores areneros, a principios de los años 80, reivindicaba el derecho y el deber de la patria salvadoreña para defenderse del comunismo. Resabios de ese discurso fundacional afloraron en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales, esta vez alimentado por una nueva consigna anticomunista y antiterrorista.

Tal vez entonces, sería más adecuado hablar de los nacionalismos en vez del nacionalismo, para evitar así caer en reduccionismos simplistas que impiden observar el fenómeno desde diferentes perspectivas y en toda su magnitud. Y tal vez así, con una mirada más abierta y menos prejuiciosa, pudieran finalmente resolverse las interminables enemistades que bloquean muchos de los conflictos de carácter nacionalista y que tanto sufrimiento causan a las sociedades que los protagonizan.

Juntos el hambre y las ganas de comer

Ni modo. Ni el Plan “Mano dura”, ni la ley temporal antimaras y su prórroga, ni los operativos “Puño de hierro”, ni la dotación extra de dinero a la Policía Nacional Civil (PNC), ni la intensificación de patrullajes de los Grupos de Tarea Conjunta que —desde hace años— mantienen a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) realizando labores de seguridad pública... Nada; de verdad, nada ha resultado efectivo para combatir la avalancha de crímenes que sigue castigando a nuestro pueblo. Peor aún, el número de homicidios ha aumentado en lo que va del año, si se compara con lo acontecido en el 2003.

Por si fuera poco, todavía hay quienes con sarcasmo aseguran que las cifras de muertes por la llamada “violencia social” se han “disparado”. Más allá del humor negro, es una formulación de lo más cercana a la realidad. Hace unos días la PNC informó que —en los meses transcurridos del 2004— había contabilizado más de mil cuarenta hechos fatales, de los cuales más del setenta por ciento fueron cometidos con armas de fuego.

Para insistir con las ironías, en un periódico nacional apareció —también hace unos días— una nota cuyo titular era más o menos el siguiente: “Preocupa el aumento de crímenes en Guatemala: treinta en una semana”. Entonces, ¿la situación en el vecino país está peor que acá? Ese parecía ser el mensaje que se quería transmitir, junto al de otra nota que habla de setecientas muertes violentas —siempre en Guatemala— durante el recién pasado semestre. Pero con una simple multiplicación las cosas se aclaran considerando que, oficialmente, acá se habla de siete muertes diarias. El resultado, cuarenta y dos homicidios por semana en el territorio nacional.

Las cifras son escalofriantes y mantienen a nuestro país entre los más violentos de Latinoamérica, dejando a San Salvador y sus alrededores como una de las áreas de mayor criminalidad en el hemisferio. Inútiles han sido los ríos de tinta que han co-

rrido, tratando de definir cuáles podrían ser las medidas a adoptar en aras de frenar esta oleada criminal. Sin embargo, las opciones oficiales siguen inclinándose hacia la represión que — hasta la fecha— ha sido claramente ineficaz. Tanto el pasado gobierno encabezado por Francisco Flores como hasta ahora el nuevo de Antonio Saca, optaron por la fuerza como la única vía para combatir los hechos de violencia. Si bien en algún momento pueden ser convenientes medidas de ese tipo, como en el caso de ciertos operativos especiales, la eficacia de las mismas se pierde con el tiempo —como se ha revelado reiteradamente— si no se acompañan de acciones serias y permanentes en materia de prevención de la violencia, así como en los campos de la rehabilitación de los violentos y su reinserción.

Otro grave error —quién sabe si intencional— es el de señalar a las “maras” como las responsables casi únicas de los graves actos de violencia que ocurren en el país. Pese a que el conteo incesante e inaceptable de muertes continúa, tanto la PNC y la Fiscalía General de la República como el Ejecutivo siguen insistiendo en esa dirección. Cómo llegan a esa conclusión tan absoluta, es un gran misterio. Sobre todo porque una de las fallas sobresalientes del cuerpo policial salvadoreño sigue siendo su deficiente nivel investigativo. Si sus técnicos no son capaces de determinar la autoría de numerosos hechos delictivos, resulta fuera de toda lógica que puedan llegar a semejante conclusión. Basta ser un poco observador, para comprobar eso: cuando los efectivos policiales no han realizado a cabalidad su labor, se justifican asegurando con una ligereza irresponsable que la causa de la muerte tiene que ver con delincuencia común o “maras”.

Por desgracia, en El Salvador se acostumbra pensar que para cada problema hay que aprobar una ley. Lo malo viene después; cuando está vigente sirve para atacar las consecuencias y no las causas de los problemas. Así, la ley temporal antimaras se

dirigió sólo contra quienes —por decisión presidencial— son “responsables” de la criminalidad en el país. Y ahora andan con la idea de crear nuevas policías para cada situación que no han podido resolver. Van a crear la rural y comenzaron, con los últimos estudiantes de secundaria asesinados, a hablar de la escolar; así, si se incrementan los niveles de violencia en los estadios de fútbol habrá que integrar una policía deportiva y si eso ocurre en las iglesias alguien pensará en una celestial...

Sin embargo, pese a que las estadísticas señalan que siete de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego, se continúa sin enfrentar el tema de su comercialización y tráfico clandestino. No lo ven como algo prioritario y urgente, aunque esté claro que las armas sólo sirven para lesionar o matar. Asimismo no se aborda en serio otra situación que también destaca: el de la participación de los hombres en los hechos de violencia, como victimarios y como víctimas. Mientras no se consideren estos dos aspectos fundamentales a la hora de combatir la criminalidad en nuestro país, abundarán las mesas de discusión pero se volverá a tropezar —una y otra vez— con la misma piedra.

Para colmo de males, los problemas de la PNC que recientemente se han estado ventilando públicamente no son más que un síntoma de su real estado. Hoy por hoy, esta institución nacida después de la guerra se encuentra en un cruce de caminos del que todavía no sale; ni siquiera ha logrado elegir la vía correcta para avanzar en el cumplimiento de su misión. Los informes especiales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) corroboran lo antes dicho. La lista de arbitrariedades cometidas por elementos policiales y registradas por la PDDH, revela su involución con respecto al espíritu y la letra de los acuerdos de paz.

A lo anterior se suman los sucesivos planes para combatir la delincuencia juvenil organizada, que han acaparado la mayor parte de sus recursos técnicos, económicos y humanos. Los graves errores contenidos en las leyes especiales acentuaron el accionar discrecional de los agentes del orden público, al punto que se han alcanzado cifras históricas de detenciones sin que eso suponga una mejora real en el combate de la

delincuencia a todo nivel y en el de la reducción de los altos índices de violencia social.

Se ha querido golpear con la mano y con el puño —poco faltó para usar el pie— pero los problemas siguen siendo los mismos. Más aún, el número de muertes violentas se ha elevado en determinados núcleos poblacionales, como en Sonsonate por citar un ejemplo que —además— sirve para evaluar el actuar institucional. Pese a los esfuerzos realizados y la gran publicidad de Casa Presidencial, la criminalidad se ha mantenido y ha convertido a esta ciudad en uno de los sitios más violentos del país. Frente a ese cuadro, el director de la PNC y sus subalternos decidieron entrarle directamente con una intención clara: encararla con un enorme despliegue en todo sentido, para transmitir la sensación de que la institución controla la situación.

Entre las medidas adoptadas está la remoción de muchos policías destacados allá, en una cantidad que asusta: dicen que son ciento setenta y cinco agentes. No es un problema aislado, sino una deficiencia estructural grave que afecta a la institución y, por tanto, a todo el país. Sin embargo, no se ha optado por la depuración de estos agentes, cuando por la gravedad de los hechos se tomaron disposiciones tan drásticas como la citada. Surgen entonces dos preguntas elementales: ¿Depuró bien la PNC Mauricio Sandoval, cuando era su director general del cuerpo? ¿Están repartiendo delincuentes con uniforme por todo el territorio nacional, al trasladarlos de Sonsonate a otros puestos? Preocupa, además, que su Inspectoría General no haya hecho nada antes en este caso, cuando precisamente para eso está.

Así se evidencia el estado crítico de la institución que debe garantizarnos la tranquilidad, la seguridad y la paz pública. A la actual Policía Nacional Civil, pues, se la han juntado el hambre con las ganas de comer, Súmenle los nuevos escándalos de corrupción por los altos costos para el mantenimiento o suministro de partes de aeronaves, que tampoco es un hecho aislado; baste recordar el alboroto que se armó por antes por licitaciones irregulares en el suministro de uniformes. Es urgente entonces cambiar de rumbo para combatir la criminalidad y hacer de la PNC un organismo eficiente, que cumpla bien su cometido.

A continuación, transcribimos el resumen del documento *Desarrollo productivo en economías abiertas*, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para su trigésimo período de sesiones (San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 2 de julio de 2004).

Desarrollo productivo en economías abiertas

Los países de nuestra región han mostrado un intenso y persistente interés en los mecanismos de desarrollo económico y las políticas públicas para promoverlo, proceso que ha sido acompañado por la CEPAL desde su fundación, hace ya más de medio siglo. Hoy en día, el debate sobre estos temas se enmarca en el proceso de globalización, que se caracteriza por el contraste entre un inusitado dinamismo en varias de sus dimensiones —sobre todo económicas, financieras y culturales— y el lento desarrollo de una red de instituciones que permita responder a la mayor interdependencia entre las naciones en diversos planos y corregir progresivamente las acentuadas asimetrías del orden global.

En las dos últimas décadas, América Latina y el Caribe apostó con fuerza a la integración en la economía global, ya que fue la región del mundo en desarrollo que adoptó con mayor decisión los programas de liberalización económica. El examen de este período permite valorar algunos logros que fueron muy importantes, pero también identificar rezagos y temas pendientes. La CEPAL sostiene que es necesario construir sobre lo ya conseguido, pero también es preciso superar las brechas existentes y abordar los temas aún no tratados. Los avances que se consigan pueden incluso ser esenciales para consolidar una mayor integración en el plano mundial y, a la vez, para impedir que los costos sociales, económicos y políticos asociados al proceso de reformas econó-

micas hayan sido en vano.

I. Rasgos básicos del escenario internacional actual

En los años noventa se consolidaron características económicas y financieras enraizadas en prolongados procesos históricos. En ese período se fueron creando las condiciones para que la economía mundial dejara de ser un agregado de economías nacionales vinculadas por flujos de comercio, inversión y financiamiento, para convertirse progresivamente en un conjunto de redes globales de mercados y producción que cruzan las fronteras nacionales. Sin embargo, estos procesos de indudable y creciente empuje no estuvieron acompañados de un desarrollo equivalente de la institucionalidad global, cuya agenda es incompleta y asimétrica (Ocampo, Bajraj y Martín, 2001).

1. Hechos económicos destacados

En el marco de un menor crecimiento mundial, el comercio internacional se expandió a tasas cercanas a un promedio anual del 6% entre 1990 y 2003; en el 2000 la inversión extranjera directa rozó los 1,4 billones de dólares, cifra que equivale a siete veces más la de comienzos de los años noventa. Las transacciones diarias en los mercados cambiarios superaron los 1,5 billones de dólares en los primeros años del presente siglo, en tanto que las innovaciones y el cambio tecnológico se concentraban aún más en los países desarrollados.

a) Disminución del dinamismo económico mundial

Entre 1990 y 2003 el crecimiento de la economía mundial alcanzó una tasa media anual de sólo 2,6%, situándose en el nivel más bajo de la posguerra en un período equivalente. En este resultado incidieron el magro desempeño de los países desarrollados, la crisis de Europa oriental y el escaso crecimiento de África y América Latina y el Caribe. En cambio, Asia se expandió a tasas elevadas y mejoró el ritmo de crecimiento del Medio Oriente.

En el grupo de los países desarrollados se aprecia un notorio contraste entre el período 1990-2003 entre el desempeño de Estados Unidos (3% promedio anual, con una aceleración en 1997-1999, cuando superó el 4%), de la Unión Europea (2% anual) y de Japón (1% anual, incluso con tasas negativas en 1991 y 1998). Esta evolución de los países desarrollados estuvo signada además por marcados desequilibrios macroeconómicos. En particular, en Estados Unidos la expansión del gasto y la contracción de los ingresos fiscales, como consecuencia de las reducciones impositivas y de la recesión económica, transformaron el superávit fiscal de los años noventa en un cuantioso déficit, que puso nuevamente en el tapete el problema de los "déficit gemelos". En la Unión Europea, el escenario está dominado por el histórico ingreso de 10 nuevos miembros a la Unión Europea a partir del 1º de mayo del 2004.

Los países en desarrollo, incluidas las economías en transición de Europa oriental, iniciaron los años noventa con grandes diferencias en sus tasas de crecimiento. Destacaron por su dinamismo en el período 1990-2003 los países de Asia sudoriental, China e India. Los primeros, con la excepción de Indonesia, se recuperaron rápidamente de la crisis de 1997, mientras que China triplicó con creces su producto entre los años extremos del pe-

riodo (226%) e India prácticamente lo duplicó (98,1% entre 1990 y 2003). El impresionante crecimiento de China la ha convertido en el tercer importador mundial, sólo superada por la Unión Europea y Estados Unidos.

Por su parte, a partir de 1996 las economías en transición retomaron un sendero de crecimiento que ha tendido a estabilizarse en torno a un 4% en los primeros años de la actual década. África, después de su pobre desempeño en el comienzo de los años noventa, tendió a registrar una tasa de crecimiento en torno al 3% anual, sin mayores altibajos desde 1994. América Latina y el Caribe, al igual que Medio Oriente, registró un mejor desempeño a principios de los años noventa; en cambio, desde mediados del quinquenio, y sobre todo a partir de 1997, mostró caídas importantes en 1999 y 2001.

b) Exportaciones y crecimiento económico: una relación variable

En el período 1990-2003 el comercio mundial volvió a presentar tasas de crecimiento anuales parecidas a las de las primeras décadas de la posguerra, tras la fuerte desaceleración sufrida entre 1973 y 1990. Debido a la disminución simultánea de las tasas de crecimiento del producto mundial, la relación entre ambas variables en 1990-2003 fue la mayor de la posguerra, con una tasa de crecimiento de las exportaciones que casi triplicó la del producto. De hecho, la tasa de crecimiento de las exportaciones excedió a la del producto todos los años desde 1985 hasta el 2000. La creciente liberalización comercial en la industria manufacturera y en los servicios y el mayor volumen del comercio intrafirma, debido a la dinámica de los sistemas internacionales de producción integrada, explican parcialmente esta brecha entre la expansión del comercio y del producto mundiales (UNCTAD, 2002).